
*John Saxe-Fernández**

DEUDA EXTERNA
y Desnacionalización integral

Introducción

1. El concepto de “desnacionalización integral” sirve para organizar y aumentar el entendimiento, sobre una vasta masa de eventos, procesos y datos que se han venido experimentando y acumulando en la relación de México con la economía mundial. Cuando se hace mención a la “economía mundial”, nos referimos a la de Estados Unidos, país con el cual esas transacciones son preponderantes.¹

La vinculación entre la “desnacionalización integral” que actualmente impulsa la política económica adoptada por el gobierno mexicano con los procesos de absorción o “integración” respecto a Estados Unidos es estrecha. Más aún, la fundamentación histórica y empírica de esta tendencia es lo suficientemente sólida, amplia y asequible como para evitar que el analista se incline, inadvertidamente, al subjetivismo.

Cuando por otra parte se usa un término como “integración”, generalmente se está haciendo referencia a fenómenos que tipifican las transacciones económicas. Pero, mientras que la cooperación e interacción económicas hacen referencia a formas de asociación relativamente informales, la “integración” usualmente implica el establecimiento de instru-

* Profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), de la FCPyS-UNAM.

¹ Para una discusión fundamental sobre los retos que enfrenta el proceso de construcción conceptual y teórico, véase Alvin Gouldner, *La Crisis de la Sociología Occidental*, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1970; para una discusión sobre detalles técnicos respecto al proceso de formación de conceptos, consúltese Arthur L. Stinchcombe, *Constructing Social Theories*, Harcourt, Brace & World Inc., New York, 1968.

mentos formales y es precisamente por esto que cuando se hace útil este concepto para describir las relaciones entre dos naciones, dejamos de referirnos a fenómenos estrictamente económicos para adentrarnos en esferas con cada vez mayor grado de politización.

Mitchell Sharp, ex-ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, tiene suficiente fundamentación histórica y experiencia política sobre la relación de su país con los Estados Unidos cuando afirma que las áreas de libre comercio siempre tienden a transformarse en fusiones aduaneras para luego ir pasando al establecimiento de “mercados” comunes, a la unificación económica y, finalmente, a la unión política.

Estos procesos, ni son inevitables ni, en el caso de México, ventajosos dados los desequilibrios y la profunda asimetría entre Estados Unidos y nuestro aparato productivo.

Sin embargo, el efecto acumulativo de la política económica fondomonetarista adoptada por el gobierno mexicano desde 1982 ha resultado en una “reconcentración” del ingreso y de las fuerzas productivas que se ha venido manifestando en un notable incremento de los flujos netos de capital hacia el exterior, el más amplio debilitamiento de la inversión productiva y una seria reducción del mercado interno. Asimismo, el manejo externo de la política económica se generaliza conforme el país se ha sometido a la “condicionalidad” (v. gr. programas de austeridad, desnacionalización y desmantelamiento del aparato paraestatal atados a nuevos créditos) sistemáticamente impuesta por los acreedores.

La reestructuración de las relaciones de producción lograda por medio de las condiciones atadas a los mecanismos de crédito, en el caso mexicano, se orienta no tanto a “subordinar” al aparato estatal mexicano a los criterios del Fondo Monetario Internacional, sino más bien a propiciar una “convergencia subordinada”, en la que las fuerzas de “integración” y expansión de las grandes empresas transnacionales y del sistema financiero estadounidense, así como la tecnocracia y ciertos grupos capitalistas locales (fundamentalmente grandes capitalistas del mundo de la finanza, el comercio y la exportación), logran acuerdos y ventajas por medio de los programas de estabilización fondomonetaristas.

Los efectos políticos de los programas de “estabilización”, tal y como han quedado expresados en los procesos electorales de 1988, muestran que el “colchón de seguridad” proporcionado por la vasta gama de relaciones entre el estado y la sociedad civil, institucionalizadas alrededor del partido oficial (PRI), se ha desgastado seriamente, por lo que los “ajustes” tendrán que ser más “moderados”. Aunque, dentro de los actuales parámetros, la deslegitimación y desestabilización políticas continuarían debilitando a nivel político-electoral al partido oficial.

La tendencia que muestra hasta ahora la situación política creada por

el fondomonetarismo en México, se caracterizaría por una mayor incapacidad oficial para reconstruir el consenso debido al debilitamiento de las instituciones que históricamente se utilizaron para regular las negociaciones y compromisos fundamentales entre la clase obrera y campesina, los grupos burocráticos, los sectores medios e importantes masas de marginados urbanos (producto de drásticas reducciones en el empleo y en el deterioro masivo del campo) con los intereses representados por la alta “tecnocracia” en el poder.

El programa neoliberal aplicado en el país desde 1982 ha debilitado los instrumentos que tradicionalmente se emplearon para penetrar en la sociedad civil, mismos que permitieron controlar la dinámica de las asociaciones de masas, como los sindicatos y los gobiernos estatales y locales.

La tendencia a recurrir a los instrumentos coercitivos para compensar estas debilidades se incrementaría y, por otra parte, se dirigiría a desmontar la capacidad opositora de movilizar y presionar en favor de cambios en los fundamentos del programa económico y, de manera especial, de la política de desincorporación, uno de los pilares de la desnacionalización integral. En este contexto, se discutirá el nombramiento de John D. Negroponte como embajador de EU en México y los peligros que conlleva en términos de ampliar el proceso desnacionalizador al aparato de seguridad interna.

La vinculación entre deuda, como instrumento interventor, y soberanía e independencia es entonces crucial, especialmente porque la temática incide con importantes modificaciones en la posición y función que México juega ahora en términos de las necesidades estratégico-económicas de EU, en una situación internacional paradójicamente más compleja y multipolarizada. Finalmente, utilizaré el concepto de “desnacionalización integral” para hacer algunas reflexiones en torno a los dilemas inmediatos que enfrenta el país.

1. Deuda e independencia

La defensa de la independencia y de la soberanía durante el siglo XIX influyó de manera decisiva en las nociones de “seguridad colectiva” planteadas por las recién independizadas colonias hispanoamericanas. Las duras experiencias históricas a que fueron sometidas estas naciones también generaron la inspiración y el impulso para afianzar la ley y el orden internacional.²

² Véase Vicente Lecuna, *Cartas del Libertador*, New York, 1948; Vicente Lecuna y Harold A. Bierk Jr. (compiladores) *Selected Writings of Bolívar*, New York, 1951.

La promoción y elaboración de cuerpos normativos e instrumentos de organización colectiva para la defensa común fue el resultado natural tanto de la debilidad internacional como de la inquietante incoherencia interna que padecían las naciones iberoamericanas.³

La “seguridad colectiva”, el derecho internacional, el arbitraje de conflictos, el no intervencionismo y la insistencia por una resolución pacífica de las querellas internacionales, todos estos fueron elementos que se originaron y conformaron en la lucha por la soberanía y la independencia, primero ante las amenazas europeas y, posteriormente, conforme transcurría el siglo, ante el expansionismo, anexionismo e imperialismo que practicaban, de manera vigorosa, los americanos que poblaban Estados Unidos.⁴

México fue la primera nación en experimentar, de manera traumática, las verdaderas intenciones que se escondían en la Doctrina Monroe. No se va a reseñar esa serie de hechos,⁵ sino que se mencionarán varios incidentes posteriores a la guerra desatada contra México, en los que la gravedad de la situación ponía en peligro, como ahora, nuestra independencia y soberanía. Se trata de momentos históricos en los que el país recurrió a todo el cuerpo de normas disponibles para lograr una vida civilizada entre las naciones, y en los que naturalmente se generó un vigoroso pensamiento alrededor del pilar juarista de que “el respeto al derecho ajeno es la paz”: en esos momentos también la deuda externa jugó un papel protagónico. Entre los gobiernos de Buchanan y Lincoln se presentaron sucesos realmente importantes, que han sido narrados, entre otros, por Wilfrid Callcott y W. Stull Holt.⁶

En 1859 las relaciones internacionales de México se complicaron enormemente por la incapacidad del país para cumplir con el servicio de la deuda. Dice Callcott que el presidente Buchanan se aprovechó de la situación y trató de imponerle a Benito Juárez una propuesta de tratado en la cual se concedían a Estados Unidos derechos a perpetuidad sobre tres vías de transporte, a cambio de que el país norteamericano se hiciera cargo del servicio de la deuda contraída fundamentalmente con las potencias europeas. Se contemplaba, además, el derecho de EU a intervenir con

³ La primera iniciativa para establecer un movimiento panamericano fue planteada por Simón Bolívar. Siguiendo las sugerencias y propuestas de personajes como San Martín, Martínez de Rojas, Bernardo O'Higgins, Juan Egaña, etc., Bolívar impulsó la idea y la necesidad de la cooperación y confederación para el desarrollo y la protección *juntas* tanto frente a las potencias europeas como ante lo que ya se percibía como una amenaza: los EEUU. Véase Enrique V. Corominas, *Historia de las Conferencias Interamericanas*, Buenos Aires, 1959.

⁴ Un importante estudio sobre las maquinaciones de Washington encaminadas a tomar México es proporcionado por Glenn W. Price, *Los Orígenes de la Guerra con México, (La Intriga Polk-Stockton)* Fondo de Cultura Económica, México 1974.

⁵ Véase Price *op. cit.*

⁶ Cf. Callcott Wilfrid, *Liberalism in Mexico 1857-1929*, Stanford University Press, 1932; W. Holt, *Treaties Defeated by the Senate*, Baltimore, 1933.

tropas y transportarlas en territorio mexicano. De acuerdo con Callcott, este convenio probablemente habría resultado en la absorción de todo el país en pocos años. El tratado se planteaba, según Buchanan, para “ayudar” a México con su deuda, pero el Senado estadounidense lo rechazó, por una parte, porque consideraba indigno que una nación fuerte impusiera un convenio de tal naturaleza a un país vecino débil. Pero en el fondo debido a que ya se sentían fuertes conflictos internos entre el Norte y el Sur de EU, y en condiciones de una inminente guerra civil resultaba peligroso enfrascarse en una magna aventura contra México y probablemente contra varias potencias europeas.

Sin embargo, persistió el interés de los círculos dominantes de Estados Unidos por utilizar la deuda externa de México y su servicio de pagos a fin de doblegar a la nación e incorporarla de lleno como otra estrella más a su bandera, esta vez por medio del secretario de Estado de Lincoln, William H. Seward.⁷

James Morton Callahan ha ofrecido un interesante estudio,⁸ detallando la intensidad de esas ambiciones expansionistas que llegaron al extremo de autorizar al representante diplomático de Estados Unidos en México para que negociara un tratado por medio del cual los estadounidenses garantizarían el pago del interés de 3% de la deuda (contraída, insistimos, con países europeos) a condición de que esas potencias extracontinentales no recurrieran a la fuerza para hacer efectivo el pago. Dice Callcott que “a cambio México hipotecaría cuatro de sus Estados como garantía y los entregaría a EU si fuera incapaz de cumplir con el pago correspondiente”.⁹

De nuevo, el deterioro de la situación interna de Estados Unidos, que en ese entonces se componía de unos treinta y cinco millones de habitantes y de una federación que se desunía rápidamente, así como la oposición del Senado, derrotaron las propuestas. Pero, además de esas circunstancias, la fiera defensa que hiciera el pueblo mexicano bajo el mando de Juárez, fue el factor decisivo que finalmente derrotó las ambiciones externas y la intervención militar.

A lo largo de siglo y medio, las relaciones de México con los Estados Unidos encontraron sus puntos de conflicto en los esfuerzos mexicanos por consolidar la independencia y mantener su integridad territorial:

⁷ Consúltese, James Morton Callahan, *The Evolution of Seward's Mexican Policy*. Morgantown, 1908; una profundización novelística de alta fidelidad histórica sobre las ambiciones y la personalidad de Seward, es proporcionada por Gore Vidal, *Lincoln*, Ballantine Books, New York, 1984.

⁸ *Op. cit.*

⁹ Véase Wilfrid Hardy Callcott, *The Caribbean Policy of the United States, 1890-1920* Octagon Bookw, New York, 1977, p. 31.

eso, tal y como lo muestra Karl M. Schmitt,¹⁰ caracterizó al primer medio siglo, mientras que durante los últimos cien años además de los problemas migratorios y de política exterior (defensa del principio de no intervención y del derecho internacional), y más recientemente los del llamado narcotráfico; son los puntos conflictivos que se han generado, especialmente en todo intento mexicano por disminuir la dependencia económica respecto a los Estados Unidos.

“En esta lucha”, dice Schmitt, “México ha tenido las mejores oportunidades de actuar y tomar decisiones en forma independiente, cuando los Estados Unidos dejaba de interesarse en los asuntos hemisféricos debido a graves problemas, ya sea internos o internacionales, cuando el pueblo de México estaba unido e, idealmente, cuando han coincidido ambas condiciones”.¹¹

La historia de las relaciones México-Estados Unidos muestra que cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando México se ha visto desgarrado por la guerra civil y cuando las necesidades y atención de Estados Unidos se han centrado en México, es cuando el país, como insiste Knigh, “ha sufrido sus máximos reveses en términos de pérdida de territorio y libertad de acción”.¹²

Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la derrota militar de EU en Vietnam, la atención de Washington y sus intereses se centraron primordialmente fuera del hemisferio aunque, como ocurrió en Guatemala en 1954, la República Dominicana en 1965 o en Chile en 1973, en ningún momento la política hemisférica dejó de fortalecer los fundamentos económicos, políticos, militares e ideológicos de la Pax Americana.¹³

Terminada la Segunda Guerra Mundial, no sólo se amplió de manera vigorosa la presencia militar de Washington en el continente, sino también la empresarial y financiera. Las organizaciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos similares, empezaron a jugar un papel directo en los intentos de Washington por adecuar las políticas económicas internas a los intereses de sus grandes empresas: la deuda externa, tal y como la han utilizado organismos tipo FMI y BM, han sido el instrumento para influir de manera decisiva en los diseños económicos internos de los países llamados (¿irónicamente?) en “vías de desarrollo”.

Desde su misma inepción, el FMI y el BM, primordial aunque no ex-

¹⁰ Karl M. Schmitt, *México y Estados Unidos, 1821-1973*, Editorial Limusa, México, 1978, esp. pp. 223-233.

¹¹ *Ibid*, pp. 231-232.

¹² *Ibidem*.

¹³ Consúltese, John Saxe-Fernández, *Proyecciones Hemisféricas de la Pax Americana*, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1975.

clusivamente, concibieron la “deuda” como un instrumento eficaz para “orientar” las políticas económicas. Los llamados “recetarios fondomonetaristas”, como lo ha observado Joyce Kolko,¹⁴ invariablemente se encaminan a la puesta en práctica de políticas que afectan, de manera decisiva, las correlaciones internas de poder y los sistemas internos de alianzas: aumentan el nivel de explotación de la clase trabajadora, ya que se supone que este tipo de política estimula la “modernización” que presumiblemente significa la introducción de maquinaria, aunque es difícil entender cómo si la mano de obra se abarata drásticamente; se eliminan los subsidios orientados a satisfacer las necesidades de la clase trabajadora y campesina (canasta básica, combustible, transporte público, etc.); se reducen las importaciones, incluso de bienes de capital malamente requeridos para mantener en condiciones operativas la planta productiva, mientras se estimula la maximización de las exportaciones a fin de generar divisas para el servicio de la deuda; se reduce, en consecuencia, a niveles dramáticos y peligrosos la demanda interna y se aplican políticas monetarias que llevan a los sistemas económicos a estados que oscilan entre el estancamiento y la depresión, mientras tales medidas, lejos de estimular el ahorro y la inversión productiva, generan niveles altos de especulación y fuga de capitales.¹⁵

2. Deuda, estabilidad y soberanía

Tal política desemboca en una distribución regresiva de la riqueza, la ampliación de los desajustes sociales, el cierre de la planta productiva (que genera altos índices de desempleo), y en la más rigurosa austeridad en la inversión pública productiva; lo cual genera un estado cada vez más profundo de crisis con serios riesgos sociales y políticos, lo que induce a los “expertos” del Fondo a plantear ampliaciones en el gasto dedicado a la “seguridad pública”.

La vinculación entre la deuda, la estabilidad y la soberanía resulta entonces crucial. En Iberoamérica, y en México de manera especial, los resultados de tal estrategia están a la vista. Durante el periodo 1982-1988,

¹⁴ En “La Crisis del Capitalismo Estadunidense”, *Revista Mensual*, 1980. Para una versión actualizada sobre las modificaciones de la política fondomonetarista, como resultado de la dinámica interna de diversos países iberoamericanos, consúltese, James Petras, “The International Monetary Fund, Austerity and the State”, en James Petras *et al.*, *Latin America: Bankers, Generals and the Struggle for Social Justice*, Rowman & Littlefield, 1986.

¹⁵ Consúltese Victor Tokman, “Global Monetarism and Destruction of Industry”, *CEPAL Review*, n. 23, August 1984, pp. 107-121; Mohsin Kahn and Nadeen Ul Haque, “Capital Flight from Developing Countries”, *Finance and Development*, March 1987.

¹⁶ CEPAL “México: Rasgos Generales de la Evolución Reciente”, mimeogr. 1988, pp. 4-5.

se registró uno de los retrocesos más severos en términos de la inversión total del país, lo cual implica, según la Comisión Económica para América Latina, “un rezago de más de 20 años en los mínimos de bienestar de la población”.¹⁶ Según ese organismo, a consecuencia de esa política económica “las distorsiones distributivas se acentuaron y el peso de la crisis descansó una vez más en los asalariados”.¹⁷ También indica que el salario mínimo real en 1987 equivalió aproximadamente al de “25 años atrás”, pero “con un crecimiento mayor de las desigualdades sociales”.¹⁸

Además de los asalariados, los pequeños y medianos empresarios han sido las principales víctimas de un proceso que fortalece con celeridad al aparato exportador, pero afecta a la totalidad de la economía y ha estado acompañado de una merma significativa de la demanda interna. Como resultado de la brutal recesión que se ha inducido, no sólo se perdieron 5 ó 6 millones de empleo, sino que también se han clausurado al menos unas 50 mil empresas productivas.

Un empresario sintetizó el serio dilema en que se encuentran los inversionistas, cuando a la pregunta formulada por un periodista de por qué ahora las tasas de interés estaban bajando y no se hacían inversiones, replicó: “bueno, ¿para qué invertir si no tenemos a quién vender?”

Las contradicciones generadas por la política “neoliberal”, que afecta los fundamentos de la soberanía nacional en tanto coloca la dirección económica del país en manos de instituciones como el FMI y BM, son dramáticas: el Producto Interno Bruto declinó más de 17.5%; el producto interno bruto per cápita cayó 25%; el salario mínimo, en términos reales, se contrajo 35% del PIB, mientras la recesión se extiende a todas las estructuras sociales.¹⁹ Durante el periodo 1982-88 la inflación creció en más de 2,400% y el peso se depreció en 2,297%, mientras que la fuerte caída en los niveles de producción industrial se debió, según Juan Castaings T. y Juan José Kochen B., “a la conjugación de tres factores:

- a) La crisis financiera alteró todos los planes productivos de las empresas (recuérdese la quiebra del Grupo Alfa). La inversión se redujo notablemente, lo mismo que todas las compras que se hacen en el mercado interindustrial. La caída en el índice de Actividad Económica (entre mayo de 1982 y marzo de 1984) es brutal.
- b) El alza vertiginosa en el precio del dólar hizo que las importaciones se encarecieran automáticamente y el resultado fue la disminu-

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibidem.*

¹⁹ Juan Castaings T. Esther Mejía y Juan K. Kochen B. coordinadores, “El Gobierno de la CRISIS”, Balance del Sexenio”, *Excelsior*, Sección Financiera, martes 29 de Noviembre de 1988.

ción en el volumen de importaciones, y al reducirse los inventarios frenó de golpe al aparato productivo.

c) La reducción de los salarios reales provocó una aguda contracción del mercado interno, hecho que obligó a las empresas a reducir los planes de producción.²⁰

En 1982, el PIB total (en millones de pesos constantes de 1970) fue de 903,838.60 y para 1988 el “fondomonetarismo” logró mantenerlos a niveles más bajos (899,282.10), mientras la población pasó de 73,122.30 en 1982 a 83,273.20 en 1988. El PIB per cápita pasó de 12,360.60 pesos en 1982 a 10,799.20 en 1988. La deuda externa, por otra parte, pasó de 87,588 millones de dólares en 1982 a 104,524 millones en 1988.²¹

El deterioro económico ha ido paralelo con un deterioro en la determinación interna de la estrategia económica, habiéndose aumentado peligrosamente la vulnerabilidad institucional, la legitimidad y la soberanía. Es necesario, en consecuencia, recurrir al proceso de formación de conceptos y proponer el de “desnacionalización integral”, como uno que ayuda a describir partes significativas de los procesos políticos inducidos por la estrategia económica, con importantes consecuencias internas y externas (especialmente en la relación con los Estados Unidos).

El uso del calificativo “integral” añadido al de “desnacionalización”, se justifica plenamente, pues con el mismo hacemos referencia al hecho de que los procesos desnacionalizadores están teniendo impactos profundos en el aparato productivo y, más que eso, en la sociedad mexicana como un todo.

Es cierto que la penetración transnacional de la economía se ha estado profundizando durante las últimas décadas, pero nunca como ahora el asalto frontal a las conquistas históricas y sindicales del pueblo mexicano ha sido más notorio, coherente y vigoroso. El desmantelamiento de la función rectora del Estado en la economía, la amplia e intensa acción privatizadora y la inusitada apertura comercial, constituyen elementos centrales de la “desnacionalización integral”, que se lleva a cabo más por razones ideológicas y por intereses económicos estadounidenses, que por necesidades “técnicas”.

La transformación de México en tributario de los grandes centros de poder, especialmente de EU, se ha logrado por medio de la “extranjización” del proceso de toma de decisiones en materia de política económica: desde el momento mismo que se hizo esta gran cesión de la soberanía (concibiendo toda la estrategia económica alrededor del servicio

²⁰ *Ibid*, pp. 1-6.

²¹ Consúltese, “Las Cifras del Sexenio”, en Castaingts *et al.*, *op. cit.*, p. 6F.

de la deuda pública), se permitió que, de manera concreta y cotidiana, las instituciones financieras internacionales y los grupos similares de aquí “presidieran” lo relativo a definir y aplicar la inversión pública, priorizando, desde luego, sus intereses y anteponiéndolos a los del país.

Los datos económicos antes mencionados ya se manifiestan en altos índices de desnutrición, deterioro de la salud pública, del medio ambiente, rezago en la construcción habitacional, deterioro masivo de la infraestructura, altos índices de delincuencia y desorganización social y personal y, mientras, curiosamente, todavía se sigue insistiendo en calificar tal política como “moderna”, las instituciones educativas, los programas de investigación científica y desarrollo tecnológico, las grandes actividades artísticas y todos los aspectos de la vida comunitaria, han sido gravemente afectados.

La frustración es notoria mientras todos los “precipitantes” de la violencia social han sido, de esta forma, acicateados. La abrupta caída de la inversión pública destinada a apoyar los sectores estratégicos de la economía, se ha transformado en el pivote más importante del proceso de “desnacionalización integral”.

Según Ifigenia Martínez, más que un “adelgazamiento del Estado” se está produciendo un adelgazamiento de “la legitimidad del sistema”. En efecto, los análisis hechos del actual “diseño” presupuestal, muestran evidencias concretas y perfectamente medibles de que se toman medidas contradictorias, al dejar intacto el gasto para el aparato policiaco-militar y al mismo tiempo “ir en contra de la economía nacional y en contra de las empresas que están bajo su control directo”.²²

¿A qué estamos haciendo referencia específicamente? Entre otros factores, al hecho, comprobado con base en la información oficial, de que se observa una traumática caída de la inversión pública destinada a apoyar a los sectores fundamentales de la economía. Según datos revelados por la prensa nacional, en el periodo 1983-1988 las reducciones reales en sectores como el desarrollo rural, el pesquero y la industria energética habían llegado al 55.3, 67.9 y 37.5 por ciento, respectivamente.²³

El daño que están sufriendo la planta productiva y la infraestructura física del país, es de vastas proporciones. Los problemas del sector agropecuario, gravísimos. El campo mexicano muestra un proceso de desmecanización acelerada, junto con una “privatización” de la actividad agropecuaria. De las 16 millones de hectáreas mecanizadas de la frontera agrícola, sólo 55.62 por ciento cuenta con tracción mecánica, por lo que existe un déficit aproximado de 113 mil 205 tractores.

²² En John Saxe-Fernández “Desnacionalizar: Tarea Integral del Gobierno”, Excelsior 26 de Abril de 1988, p. 7A.

²³ *Ibid.*

Además, según datos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 90 por ciento del sector empresarial del agro utiliza tractores, mientras que la mayoría de los campesinos hacen un uso limitado en extremo de este recurso. Naturalmente se están acentuando los contrastes en el campo, tanto en rendimientos como en costos de producción, aunque la tendencia a la baja en el uso de insumos mecánicos ya se generaliza.

Se está sacrificando al campo y a la ciudad, al campesino, al obrero y a la clase media, para “cumplir” con los acreedores internacionales e internos. De cada peso del gasto neto del gobierno Federal, excluidas amortizaciones, más de 50 centavos se destinan al pago de intereses de la deuda interna. Si a esto añadimos el servicio de la deuda externa y tomamos en cuenta la magnitud de la deuda pública, entonces localizaremos ahí —y no en el sector paraestatal— la fuente que afecta de la manera más desfavorable el ejercicio de las finanzas públicas, tipificado por un desvío masivo de recursos a gastos improductivos.

El sector privado dedicado a la especulación ha sido el gran beneficiario de esta estrategia económica. Ellos y las grandes transnacionales, fundamentalmente estadounidenses. Según datos recabados por el Centro de Información y Estudios Nacionales (CIEN), la privatización de la deuda interna se acentuó notablemente en años recientes. Los valores en poder del sector privado pasaron del 21 al 44 por ciento entre 1985 y 1987. La inversión productiva, mientras tanto, continúa reduciéndose. En 1987, 26.9 por ciento en relación con 1986 y representó apenas poco más del 5 por ciento del PIB.

Cuando hablamos de desnacionalización integral, hacemos referencia precisamente al desmantelamiento histórico que sufre el sector público mexicano. La descapitalización que se da en las ramas económicas prioritarias se traduce, por obra y gracia de la ideología imperante, en “desincorporaciones” y en inusitadas entregas de grandes plantas industriales —petroquímicas, automovilísticas, en la rama de bienes de capital, siderúrgica, y en el transporte aéreo, entre otros— al capital transnacional y sus socios internos.

Si hablamos de un “desmantelamiento histórico”, queremos expresar exactamente eso: en el periodo 1983-1988 será la primera vez, desde hace cincuenta años, que la inversión pública sufre una caída real. Según datos recabados en la Nacional Financiera y la Secretaría de Hacienda por Francisco Vidal Bonifaz, el contraste con el sexenio anterior no puede ser más dramático. En el periodo 1977-1982 la inversión pública se expandió a una tasa real de 133.2%, en los últimos años ha tenido una caída vertiginosa del 40.8 por ciento. En 1979 la inversión pública representaba el 15.7 por ciento del PIB. Pero gracias a la aplicación de los programas del FMI en 1988 apenas llegó al 5%.

Ocurre la “desnacionalización integral” por medio del diseño presupuestario impuesto por los acreedores, en que el Estado se aparta de sectores estratégicos del quehacer económico. La desnacionalización integral continúa profundizándose, al punto que ahora ya puede cuestionarse la sobrevivencia misma de la llamada “economía mixta”. El caso de la petroquímica básica (reservada exclusivamente al Estado por mandato constitucional) es notable. Simplemente se recurrió a aplicar una “reclasificación” que ya permitió privatizar un número considerable (más de 30) de productos hasta entonces definidos como básicos. La Comisión de Petroquímica argumenta que el Gobierno Federal carece de recursos económicos para financiar el crecimiento de esa industria y por lo tanto, se propone que el Estado no construya las instalaciones de esa rama y, para ahorrar, las tome en renta a empresas constructoras “nacionales y extranjeras” de la iniciativa privada.

Se argumenta que la petroquímica básica es deficitaria. La balanza comercial en la rama fue negativa por 3,545 millones de dólares entre 1980 y 1987. Según fuentes oficiales, en una perspectiva, por la elevación de la demanda y la descapitalización a que se ha sometido a esta industria, se estima que en los próximos seis años, es decir, entre 1989 y 1994, el país gastaría 8,616 millones de dólares para adquirir los químicos necesarios.

La tecnocracia, siguiendo lineamientos externos, está empeñada en forzar esta “desincorporación”. En realidad, no les interesa ni mejorar la eficiencia en el manejo de las paraestatales ni mantener el control de actividades estratégicas en manos nacionales. Jaime Bautista Román sintetizó recientemente un aspecto central de lo que hemos denominado “la desnacionalización integral”, al observar que la prioridad del grupo en el poder es:

cumplir, aun a costa de rematar todos los bienes nacionales, los compromisos adquiridos con la banca extranjera en materia de pago del servicio y el capital de la deuda externa.²⁴

La descapitalización de la petroquímica básica ha sido sistemática. Si en 1983 se invirtieron 472 millones de dólares, en 1987 la inversión se redujo a 142 millones. Para solucionar este “problema se propone, siguiendo la línea fondamentalista, un paquete (que en los hechos se traduce en una privatización y transnacionalización) para evitar que entre 1988 y 1995 se genere un déficit de casi diez millones de dólares.

Como el interés nacional resulta posiblemente algún resabio arcaico y

²⁴ En John Saxe-Fernández “Adelgazamiento Estatal: ¿Fin de la Economía Mixta?”, *Excelsior*, 1 de Marzo de 1988, p. 8A.

lo muy “moderno” es cumplirle a los acreedores, a los especuladores de aquí al capital internacional, entonces se propone financiar la petroquímica básica mediante Fondos de Fomento del Extranjero, estableciendo empresas proveedoras de servicios para las plantas petroquímicas en las que no intervendría Pemex, así como por medio del arrendamiento a particulares de esa industria “que tampoco construiría PEMEX”. Según fuentes oficiales, empresas nacionales o extranjeras podrían arrendar a Pemex las plantas o prestar otros servicios. Se trata de una “desincorporación” en la cual, sin modificar el marco jurídico, de hecho se privatiza a la industria petrolera. Lo más interesante es que, según informaciones públicas, la medida cuenta con la aceptación del actual mandatario, Carlos Salinas.

La venta irrestricta de paraestatales está en efecto derivando en una alta participación de empresas extranjeras en áreas altamente sensibles de la economía, como lo han venido advirtiendo asesores del sector privado nacionalista. Además, ese sector apunta que aunque el proceso de privatización se inició hace ya varios años, no se han definido claramente los objetivos y criterios para la venta de paraestatales y las ofertas se han hecho en forma por demás cerrada, olvidando que el discurso inicial resaltaba la importancia de que se conservara la propiedad de las empresas en manos de capitales nacionales y se privilegiaran las compras hechas por pequeños y medianos inversionistas y el llamado sector social, “ambos hasta ahora al margen de las operaciones”.²⁵

La desnacionalización integral auspiciada por el FMI y los hacendistas locales, se ha profundizado porque la mayoría de las paraestatales han ido pasando a manos de grandes grupos financieros que, como lo indica la revista empresarial *Transformación*, “con todos los privilegios del caso han podido concentrar su poder y su riqueza con el adelgazamiento del Estado”.²⁶ Este hecho, insiste esa fuente, cobra especial importancia si se toma en cuenta que “con la apertura de la economía será mayor la injerencia de los capitales extranjeros en estos grupos y, por ende, aumentará la posibilidad de que éstos se infiltren en las paraestatales reprivatizadas”.²⁷

Es claro, además, que el adelgazamiento no se ha realizado para aumentar la productividad y la eficiencia, sino con el fin de satisfacer las demandas de esos grupos. En efecto, “un análisis de 247 empresas consideradas como netamente industriales demuestra que estas fueron, hasta el inicio del proceso de privatización, altamente rentables”.²⁸

²⁵ *Ibidem.*

²⁶ *Ibidem.*

²⁷ *Ibidem.*

²⁸ *Ibidem.*

Según el economista Ramón Martínez, la venta de las paraestatales estratégicas “es la negación de la economía mixta, como se llama a la participación estatal en la producción y distribución”,²⁹ o al que preste servicios y venda bienes esenciales para el funcionamiento de la economía. Además, conviene recordar que, no obstante todas estas desincorporaciones, no se ha abatido el déficit público. Como apunta Bautista Román,

...el Estado se ha desprendido de más de 500 entidades, y esta acción no se ha reflejado en una disminución del déficit público, que se alimenta fundamentalmente de la deuda externa e interna y no de los gastos que genera el sector paraestatal.³⁰

El énfasis que se ha venido dando a la “desnacionalización integral”, por medio de los programas de “desincorporación” y “privatización”, ha sido reiterado por el Fondo Monetario Internacional como una condición importante para otorgar nuevas líneas de crédito. La privatización de los recursos minerales estratégicos, en los que Estados Unidos es deficitario e importante consumidor, es uno de los aspectos centrales del proceso desnacionalizador.³¹

Entre las empresas en las que el interés estratégico —no menos que empresarial— de Estados Unidos está centrado, además de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, ocupa un lugar importante la minera de Cananea, consorcio estatal que tiene pasivos por 980 millones de dólares contraídos al inicio del sexenio delamadridista para expandirse y multiplicar su índice de producción, que en el último trimestre de 1988 fue de 35 mil toneladas de cobre.

Dada la magnitud de Cananea, los índices de producción y de ventas y la cuantiosa inyección de recursos durante los últimos años, se trata de una operación de gran envergadura. Según datos proporcionados por Emilio Ocampo Arenal, director general de esa empresa, Cananea “está totalmente consolidada y con una mayor productividad, así como las exportaciones del metal que oscilarán en alrededor de 150 millones de dólares”.³²

Según lo indica la Carta de Intención firmada con el FMI por el actual gobierno mexicano, se reprivatizarán empresas históricas como Cananea,

²⁹ *Ibidem.*

³⁰ *Ibidem.*

³¹ *Ibidem.* Para más antecedentes, consúltese, John Saxe-Fernández “Reprivatizaciones: Festín Desnacionalizador”, *Excelsior*, 22 de marzo de 1988, p. 7a y 11A. Véase también James Cypher, “Mexico’s Structural Economic Crisis”, Pacific Coast Conference on Latin American Studies Conference Paper, October 1986.

³² Saxe-Fernández, “Festín Desnacionalizador”, *op. cit.*, p. 11A.

que en estos momentos es un gran negocio para la nación. En este caso específico, llama la atención que el precio del cobre en los mercados internacionales ha mejorado sustancialmente. En consecuencia, no existe fundamento alguno para esta operación, más que las necesidades empresariales y militares de Estados Unidos. Se trata de un depósito mineral estratégico irremplazable y, además, la empresa opera a un nivel de productividad muy alta, estimada en 300 millones de dólares.

¿Por qué se desincorpora una paraestatal estratégica que, según todas las evaluaciones existentes, es una operación muy sólida y que ha entrado en una etapa de expansión y mayor productividad? ¿Cuál es el criterio efficientista para pasar Cananea a manos del sector privado y transnacional?

Las ventas de la paraestatal en el último trimestre de 1987 fueron de 199 mil millones de pesos y durante 1988 aumentó en un 487%, “el mayor crecimiento de ventas en el mercado nacional”, al registrarse 247 mil millones por este concepto.

Pero esta es una operación entre cientos, y desde que la economía nacional se ha venido rigiendo por los criterios del FMI, la desnacionalización integral se ha expresado en la transferencia al sector privado de 1.2 millones de hectáreas de reservas mineras, ricas en plata, plomo, zinc y cobre.

Antes de la llegada al poder de la oleada “modernizadora” del FMI, el Estado mexicano contaba con 5.6 millones de hectáreas que integraban la llamada reserva minera nacional. Esa participación se ha venido reduciendo a 4.4 millones hasta hace poco, mientras el sector privado, abrumadoramente representado por prestanombres de grandes consorcios mineros estadounidenses, ha elevado su control y sólo entre 1986 y 1987 pasó de 1.4 millones de hectáreas a 2.6 millones, mientras que hasta diciembre de 1985 se habían otorgado 18 mil 500 concesiones mineras.

El programa de desnacionalización integral se expresa en la privatización de la petroquímica básica (reclasificada), la minería nacional, la industria azucarera y empresas como Dina, todas tendientes al desarrollo económico e industrial de un México soberano e independiente. Varios analistas del sector industrial del gobierno advirtieron que la puesta en venta de 16 ingenios azucareros y las desincorporaciones mineras antes mencionadas, “limitan la rectoría económica del Estado porque esta renuncia a explotar dos industrias fundamentales en la economía del país”.³³

Los mecanismos de desincorporación se mantienen en secreto. Se tra-

³³ *Ibid.*

ta de transacciones de y entre tiburones, donde sólo una parte mínima incluye la participación del llamado “sector social”. Siguiendo los criterios de la desnacionalización integral, el gobierno da un “trato discriminatorio al sector social en la venta de paraestatales”.

Según Porfirio Camarena, director de la Asociación Nacional de Empresas Sindicales de Interés Social, este sector,

. . .no ha sido suficientemente informado de los mecanismos que está utilizando el gobierno para poner en venta sus entidades, lo cual revela que hay más interés con el sector privado.³⁴

Pero, como lo indicamos anteriormente, el sector privado “nacional”, dedicado a la inversión productiva, también se ha visto marginado del proceso, que ha favorecido al sector más transnacionalizado y especulador, popularmente conocido en México como “los 300 de Legorreta”.

El interés de ese grupo de la alta finanza y sus negocios es, en realidad, el que ha recibido un considerable subsidio ya que, como lo ha mostrado José Chanes Nieto,

. . .muchas de las entidades que se vendieron o se ofrecen en venta fueron adquiridas en quiebra, por el gobierno y hoy presentan un saneamiento en sus finanzas.³⁵

Precisamente en épocas de crisis, opina Chanes, es cuando “debe fortalecerse más a estas entidades, en lugar de trasladarlas a la iniciativa privada”.³⁶ Después de una cuidadosa consideración sobre los factores legales, administrativos y políticos que han entorpecido el funcionamiento de muchas entidades del sector paraestatal —que como cualquier otro, incluido el privado, requiere de constantes correcciones— Chanes Nieto afirma que, de continuarse con la tendencia actual de desincorporar, “la llamada economía mixta estaría caracterizada por socializar las pérdidas y privatizar los beneficios”.³⁷

3. El dilema

El impacto estructural de las políticas fondomonetaristas adquiere características propias, como es natural, en el caso mexicano, tanto en razón

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

de la naturaleza de su sistema social y político, como de su posición geográfica y económica respecto a los Estados Unidos. Los programas fondomonetaristas no sólo han afectado variables macroeconómicas claves, habiendo logrado detener el proceso de crecimiento económico por más de seis años, sino también las variables macrosociales y “macropolíticas”, y aquí es donde el concepto de “desnacionalización integral” cobra un inusitado valor analítico. Este es especialmente el caso ahora; que existe nueva documentación que ha destruido muchos mitos utilizados por la tecnocracia para justificar su actuación. Han sido seriamente debilitados en lo interno y en lo internacional.

“Renunciar representa para mí una liberación inapreciable. . . y la posibilidad de comenzar a lavarme de la culpa, de lo que ayudé a hacer en contra de millones de personas pobres y hambrientas”,³⁸ dice el veterano asesor económico del FMI, Davison L. Budhoo en inusitada carta de renuncia presentada en 1988.

El personal del FMI, afirma Budhoo, se ve a sí mismo “como una nueva nobleza sobre la Tierra, que ejerce poder, influencia y autoridad, sobre las vidas de millones de desventurados, en un nuevo oscurantismo de finales del siglo XX caracterizado por un estado de tiranía, dictadura y opresión continuo y sin fin”.³⁹

Este importante documento, cuyos puntos centrales ilustran algunos aspectos confidenciales sobre la relación política establecida por el FMI con la estructura del poder local, muestra la existencia de un plan “secreto” del FMI para lograr la transferencia a los consorcios de los acreedores de lo que queda de nuestras industrias y recursos naturales más valiosos. Es decir, se trata de un esquema dirigido a completar el proceso de “desnacionalización integral”.

La estrategia le permite al FMI colocarse como el juez calificador que decidiría cuáles países “merecen” participar en el mecanismo de reducción de deuda, condicionado nada menos que al continuo traspaso a extranjeros de la propiedad sobre los recursos naturales estratégicos, así como de las actividades económicas hasta ahora consideradas prioritarias y estratégicas y explícitamente protegidas por la Carta Magna de 1917.

La clasificación “secreta” del plan se debe no sólo a la naturaleza inconstitucional que adquiriría en varios casos —y de manera particular en México—, sino también a que se incluye el establecimiento de “un sistema punitivo contra los países descarriados”, que puede ir desde declarar-

³⁸ Davidson Budhoo “Letter of Resignation from the Staff of the International Monetary Fund”, May 18, 1988.

³⁹ *Ibid.*

los “no elegibles” para nuevos créditos, hasta “la intromisión en sus asuntos políticos internos, con instigación solapada al derrocamiento de gobiernos antifondomonetaristas”.⁴⁰

No deja de llamar la atención —y preocupar— que la mayoría de los medios de información en EU y México decidieron no dar mayor relieve al documento de renuncia de Budhoo, no sólo porque ofrece una información ampliamente documentada de los pormenores de la forma de operar que ha caracterizado al FMI, sino también porque advierte que países como México “estarían en camino de una renegociación de su deuda en esos términos”, con la firma de una nueva Carta de Intención. Esa Carta de intención, finalmente, se concretó, y confirma las aseveraciones de Budhoo en sus aspectos fundamentales, es decir, aquellos referidos al proceso de “desnacionalización integral”.

Un hecho importante es que la negociación se ha realizado dentro de los parámetros de los acreedores, que ahora reconocen que la capacidad del Estado mexicano para imponer las más duras condiciones de los programas de ajuste con un mínimo de oposición ha quedado seriamente desgastada, como lo indica la pérdida de influencia y credibilidad respecto a la densa gama de vínculos que le permitió hasta hace poco, manejar las fricciones en la sociedad civil.

Esa sociedad civil ya no acepta tan fácilmente como antaño, la versión “disneylandia” de las negociaciones con el FMI. Por ejemplo, la tecnocracia neoliberal siempre ha insistido que la firma de la Carta de Intención en nada vulnera la soberanía y asegura que fue creada y redactada por nuestros hábiles negociadores.

Ahora existe confirmación documental de este engaño. Dice Budhoo:

Nosotros —es decir, los asesores económicos del FMI— somos quienes redactamos la Carta de Intención en nombre del ministro o encargado de Hacienda del país solicitantes; luego se la presentamos a él para que la firme, administramos el programa especificando en esa carta; esto incluye determinar si el país ha cumplido con el “criterio de comportamiento” que hemos estipulado y si, por lo tanto, es el elegido para que, en la fecha indicada, recoja los recursos financieros con los que nos habíamos comprometido y que otras instituciones de apoyo habían ofrecido.⁴¹

Se termina así, tajantemente, con varias ficciones. Una, lo realmente espurio del debate entre acreedores y deudores sobre el carácter “políti-

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

co” de la deuda. No hay nada que discutir. Los primeros, siempre la han concebido como un instrumento político y financiero. La naturaleza y la intención misma del FMI, desde su inicio y según lo indica el pensamiento franco y claro de Dean Acheson, siempre fue definido como un medio político para preservar y ampliar el interés corporativo y “nacional” de Washington y, en segundo lugar, el de sus aliados en Europa y Japón, en tanto que acreedores del Tercer Mundo.

Los aspectos financieros se hilvanan también con las consideraciones y capacidades que ofrecen los servicios de inteligencia e incluso con los programas desarrollados desde la Segunda Guerra Mundial en el orden militar y paramilitar. Sin embargo, los publicistas y académicos afectos al FMI argumentaron siempre sobre la base de la naturaleza financiera y técnica del asunto en estricto sentido monetarista, pensando tal vez que eso era para consumo doméstico.

Según Budhoo, ahora el FMI también incluye —obviamente en sus planes secretos— una amplia gama de instrumentos coercitivos para enfrentarse a regímenes que se resistan a entregar su dirección económica, así como sus principales empresas y recursos naturales, a los grandes consorcios de los acreedores. Esas amenazas irían desde el bloqueo de créditos hasta el derrocamiento, pasando, presumiblemente, por toda una vasta gama de acciones, incluidas aquellas que explotan las vulnerabilidades personales —y financieras— de los encargados de la negociación, hasta otras más amplias y violentas, de naturaleza paramilitar.

Cuando todo un asesor económico del FMI durante más de 12 años, como Budhoo, advierte que existe una intención de intervenir en asuntos políticos internos e incluso de llegar hasta la “instigación solapada para derrocar gobiernos recalcitrantes” o amenazarlos con un baño de sangre, se concluye que, para hacerlo de manera creíble, sería requisito indispensable una estrecha vinculación y coordinación entre la alta burocracia fondomonetarista y el aparato de seguridad nacional estadounidense, especialmente el dedicado a las operaciones encubiertas.

Esta coordinación se ha logrado a base de incorporar, en los altos mandos de asesorías del aparato financiero, a especialistas en la violencia política y en campañas de “desestabilización” como Henry Kissinger, quien desde el Consejo de Seguridad Nacional ha jugado un importante papel por lo que toca a la utilización de instrumentos paramilitares y clandestinos para derrocar (a veces en forma sumamente sangrienta, como ocurrió en Chile, 1973) a regímenes recalcitrantes en Iberoamérica.

Las operaciones clandestinas, parte integral del espectro de amenazas fondomonetaristas, han sido también parte integral de la política exterior de Washington. Como insiste el especialista en estos asuntos, Paul Blackstock, las operaciones encubiertas “son sólo parte de un *spectrum*

más amplio de instrumentos de política exterior. Estos instrumentos van desde las presiones políticas y económicas abiertas, pasando por acciones agresivas de organismos internacionales, la utilización de partidos políticos y sindicatos y grupos similares como armas organizativas, hasta actividades como el asesinato político y el adiestramiento, armamento y disposición de espías y guerrillas para llevar adelante movimientos ‘revolucionarios’ o ‘contrarrevolucionarios’”.⁴²

Hay que recordar la campaña de desestabilización contra el gobierno de Allende en Chile, en la cual se desplegó todo este arsenal de acciones legales e ilegales, en perfecta coordinación con los opositores internos.

Hoy podría escribirse un minucioso y actualizado estudio al respecto, revisando sistemáticamente los diferentes acontecimientos económicos, políticos y policiaco-militares que se han ido sucediendo en la historia reciente de Perú y de manera especial desde que el presidente Alan García osó decir que iba a dedicar al servicio de la deuda sólo 10% del valor de las exportaciones de ese país, exactamente como lo demandaban, mínimamente, el interés nacional y el bienestar del pueblo peruano.

En el caso de México los problemas son, desde luego, muy diferentes. El nombramiento de John Dimitri Negroponte como embajador de EU aquí (se trata de un importante especialista en cuestiones de “seguridad nacional” y en la disposición de armamento de diversos grupos paramilitares de orientación revolucionaria, contrarrevolucionaria o incluso de “bandas policíacas” disfrazadas de narcotraficantes), indica que al gobierno estadounidense no sólo le interesa transformar su embajada en México en el más importante centro de operaciones para lidiar con los “problemas” centroamericanos, sino que también le preocupa el entorno político en el que se desenvuelve el gobierno de Salinas de Gortari, sumido en una crisis constitucional y de legitimidad sin precedentes desde 1929.

La idea central —o para ser más exactos, la “misión” central— de Negroponte sería evitar que los opositores al régimen logren montar una efectiva presión y movilización políticas que obliguen al Ejecutivo a modificar el rumbo económico seguido hasta ahora.

El dilema mexicano es ampliamente discutido en los círculos políticos estadounidense. Fue Cuauhtémoc Cárdenas quien llegó al meollo del asunto al afirmar que el gobierno de Salinas “está atrapado en una contradicción que sus iniciativas —más espectaculares que sustanciales— no logran disimular. Es la contradicción entre la insistencia de imponer y

⁴² Paul Blackstock, *The Strategy of Subversion*, Quadrangle Books, Chicago, 1984. Para un análisis sobre el intervencionismo estadounidense en Iberoamérica consúltese, John Saxe-Fernández, *De la Seguridad Nacional*, Colección 70, Editorial Grijalbo, S.A., México, 1977, especialmente pp. 15-55.

profundizar el proyecto económico neoliberal heredado del sexenio precedente y la persistencia en la preservación del régimen político corporativo de partido de Estado”.⁴³ Se trata en consecuencia de la virtual imposibilidad de “recomponer” al PRI y al mismo tiempo seguir el curso antipopular y antinacional trazado por el FMI.

El nombramiento de Negroponte debe interpretarse también como una muestra de la preocupación estadounidense por el masivo y acelerado deterioro de las bases políticas del actual régimen mexicano, como consecuencia de la profundización, hasta sus últimas consecuencias, del programa privatizador y desnacionalización integral que, insistimos, ahora incluye a las grandes empresas prioritarias y estratégicas del país. Las operaciones policiaco-militares y los esquemas de paramilitarización del sistema político mexicano (que ya se evidencian en la muerte de 40 ciudadanos vinculados con la oposición desde que dio inicio el sexenio), se encaminarían a desactivar todas las presiones nacionalistas, fundamentalmente el desarrollo de capacidades de movilización política por parte de ese nacionalismo.

La “desnacionalización integral” conlleva una importante reflexión y proceso: si el dirigir la economía nacional ya está en manos extranjeras (en un esquema de “convergencia-sumisión” de nuestros decididores), ahora la dirección del aparato de seguridad y el manejo y encauce de los instrumentos de violencia del Estado también se inclinarían a una peligrosa “desnacionalización”, con Negroponte a la cabeza.

El concepto de “desnacionalización integral” es, consecuentemente, un importante pivote analítico que ayuda en la dilucidación de algunos importantes procesos que empiezan a tipificar la política nacional y la relación México-Estados Unidos. Su contribución en todo intento por conceptualizar los fenómenos estructurales podría ser fundamental, especialmente por lo que respecta a un importante tipo de fenómeno estructural, usualmente denominado “poder”. Y el poder, como fenómeno, ciertamente jugará un papel central en todo juicio, evaluación o diagnóstico sobre los impactos de los diseños económicos en la relación de México con la economía mundial.

⁴³ John Saxe-Fernández, “Washington: Dilema Mexicano”, *Excelsior*, 7 de Febrero de 1989, pp. 7A, 8A.